

Paramilitarismo y neoliberalismo en Barrancabermeja El caso de la privatización de Ecopetrol 1980-2000

SILVIA JULIANA BECERRA OSTOS

Politóloga y estudiante de la maestría en historia de la Universidad Nacional de Colombia. Investigadora del IEPRI en trabajos sobre conflicto armado. Docente vinculada a la Secretaría de Educación Distrital.

OTRAS INVESTIGACIONES

Resumen

El petróleo representa un renglón muy importante en la economía colombiana y es uno de los sectores más significativos en términos de contratación laboral. Sin embargo, los compromisos del gobierno colombiano con la política exterior norteamericana están destinados a limitar las operaciones extensivas que requiere Ecopetrol para no sucumbir en el mercado internacional. Para implementar el modelo neoliberal, que implica privatizar, el Estado ha recurrido frecuentemente a varias formas de autoritarismo, en este caso paramilitarismo, ahondando en las formas de economías de enclave y de dependencia propias de los países del tercer mundo.

Palabras clave: paramilitarismo, neoliberalismo, política, cartel, guerra sucia, privatizaciones.

Abstract

Petroleum represents a very important line in the Colombian economy and is one of the most significant sectors in terms of labor hiring. Nevertheless, the commitments of the Colombian government with the North American foreign policy are destined to limit extensive operations that Ecopetrol requires and do not succumb in the international market. In order to implement the neoliberal model, that implies to privatize, the State has resorted frequently to several forms of authoritarianism, in this case paramilitarismo, to deepen economies of enclave and dependency in Third World Countries.

Keywords: paramilitarism, neoliberalism, policy, poster, dirty war, privatizations.

Presentación

El presente trabajo es resultado de una investigación realizada en Barrancabermeja acerca de las implicaciones que ha tenido el paramilitarismo en esta ciudad en términos económicos, sociales y políticos. Es un estudio de caso que pretende dar cuenta de cómo el neoliberalismo recurre al autoritarismo para legitimarse.

El presidente Uribe ha construido su legitimidad en la adopción de un discurso fuertemente orientado hacia la seguridad como reacción al fracaso del proceso de paz, y aunque no muestra avances en cuanto a una solución frente al conflicto ha mantenido al país en una tensión exacerbada sobre la resolución militar y la seguridad, lo que le ha permitido gobernar y avanzar en la profundización aún mayor de las reformas neoliberales.

Y no se avanza en la resolución del conflicto porque este es un escenario propicio para acentuar la necesidad de reformas de carácter neoliberal, puesto que la atención en temas como la seguridad y la defensa, permite ceder las demás responsabilidades estatales a organizaciones particulares de carácter nacional e internacional.

El conflicto interno ha facilitado mantener y reforzar la políticas de orientación neoliberal por medio de las cuales se ha ido extendiendo la racionalidad privada todas las esferas de actividad con la idea de la eficacia de la coordinación mercantil por la competencia y los precios para la competitividad y el crecimiento (Moreno y otros, 2007, 230).

Barrancabermeja y la relación movimiento cívico- USO: algunas precisiones

Barrancabermeja

En Colombia, dadas las características históricas de su formación, algunas regiones y municipios aislados del centro han tenido un desarrollo particular y diferente al resto del país. En estos sectores se viven dinámicas que dan cuenta de los procesos de integración-desintegración que vive nuestra nación y que le ha impedido niveles de desarrollo equitativo para sus poblaciones. Estas regiones han tenido como forma de expresarse la movilización social y Barrancabermeja, como parte de esa marginalidad, no ha sido la excepción.

El Magdalena Medio, y en especial Barrancabermeja, es una compleja región caracterizada por ser zona de colonización, proceso que se remonta a las tres primeras décadas del siglo XX, con la construcción de líneas férreas hacia el río Magdalena y la instalación del enclave

petrolero, empezando así un proceso cíclico de conflicto-migración, y luego de apertura de nuevas tierras, para luego volver de nuevo al punto de conflicto y migración teniendo como punto central la violencia.

El Magdalena Medio es central en el conflicto armado colombiano, pues es una región con una gran importancia geoestratégica, ya que permite comunicar el centro del país con la costa Caribe, así como el nororiente y la frontera con Venezuela con Antioquia y Urabá, además de sus valiosos recursos como el oro y el petróleo y el mismo río Magdalena. A lo largo del siglo XX, en el Magdalena Medio y Barrancabermeja (capital natural y epicentro de la región) se ha dado una importante presencia de la izquierda civil (partidos políticos y sindicatos), de las organizaciones insurgentes y también del paramilitarismo, pues fue en el Magdalena Medio donde tuvo su cuna el proyecto paramilitar de la década de 1980.

Es interesante ver cómo, a pesar de la lejanía con el centro, esta ciudad por su dinámica económica (la industria del petróleo) y social (cantidad de organizaciones sociales y comunitarias) ha logrado un grado alto de interlocución con el Estado colombiano. Esta ciudad es caracterizada como poseedora de una cultura irreverente, basada en las siguientes características: aborígenes rebeldes primero, movimientos sociales y políticos después (guiados principalmente en su espíritu por el movimiento obrero) y luego la actividad insurgente.

En la región, como en otras partes del país, antes del Frente Nacional las diferentes manifestaciones populares como huelgas, paros, y la “junta revolucionaria” de 1948, estuvieron ligadas ampliamente al liberalismo (o sectores disidentes de él). Sin embargo, en la década de 1960 empieza a presentarse una ruptura con los partidos tradicionales, al evidenciar que la contradicción no estaba entre liberales y conservadores, sino entre Estado y clases populares, tomando un carácter de lucha frontal contra el Estado. De esta forma, aparecen las primeras relaciones con la guerrilla como gesto solidario.

En 1963 se da el primer paro cívico en Barrancabermeja, en el cual se demandaban servicios públicos y dotación de hospitales. En esta ocasión, uno de los líderes de la protesta fue Libardo Mora Toro, quien sería posteriormente fundador del Ejército Popular de Liberación (EPL). En este paro hubo un muerto a manos de un capitán del Ejército, hecho que sirvió como argumento para ir perfilando al Estado como el enemigo y a continuar con la tendencia de apoyar propuestas políticas y sociales que confrontaran al Estado. A su vez, el Estado entra en un círculo vicioso, pues no hace inversión social en la región porque considera que sería “darle un premio” a la ciudad y a sus pobladores, y aplaudir las acciones que consideran atentan contra el orden público.

Sumado a esto, hay que considerar que después de la nacionalización de Ecopetrol (1951), las huelgas petroleras en Barrancabermeja fueron huelgas contra el Estado (como patrón), y dado el carácter represor que este asumió (tanto por darle una salida militar, como recurrir a los despidos de trabajadores), este sector específico también fue proclive a tener cercanía con la guerrilla. En muchos casos, para los años 1970-1980, algunos de los despedidos de las huelgas encontraban en las guerrillas su forma de seguir luchando.

En el caso específico de esta ciudad, es conocido que el principal sujeto de estudio en los procesos sociales ha sido el trabajador del petróleo. Desde su creación como municipio se dio una relación estrecha entre trabajadores y la población en general, explicada en parte por la alta participación de obreros en la composición demográfica del puerto, afinidades que potenciaron a los trabajadores en las confrontaciones con la USO. La organización y sus dirigentes asesoraban a los habitantes y los formaba política y culturalmente. El papel de estos obreros juega un papel importante también en los años de 1970, con las llamadas luchas cívicas, siendo el momento cumbre el año 1977. La cultura barranqueña se ha caracterizado por la solidaridad con los obreros, primero en la resistencia frente a la empresa estadounidense Tropical Oil Company (TROCO) y luego contra toda amenaza de intervencionismo y contra la autonomía popular.

Valga la pena hablar sobre lo que ha significado ser un enclave petrolero y la relación de los obreros del petróleo con los demás pobladores, es decir, cómo fue posible la simbiosis USO-pueblo. Los contratos de exploración y explotación antes y después de la nacionalización de la empresa siempre han sido proclives para el capital extranjero, invirtiendo sólo en la infraestructura necesaria para esta labor, en razón de la cual el resto de la ciudad no percibe realmente las ganancias. De tal manera, frente a las ganancias de tan grandes fuentes de riquezas, sólo la presencia de prostitutas y bares daban a Barrancabermeja el aspecto de ciudad del oro negro, ya que en infraestructura y calidad de vida de sus pobladores, nada se diferenciaba de una ciudad que sobreviviera de algún sector primario de la economía. Posteriormente, la ciudad fue creciendo y asimilando a estos como sus personajes, fue realizando una simbiosis entre la cultura obrera y la cultura popular, tomando a estos como elementos culturales e ideológicos frente a la dominación y a la explotación.

Los países ricos en recursos naturales no son los más desarrollados. Podrán tener grandes ingresos o un alto PIB per cápita, pero casi siempre carecen de instituciones sólidas y niveles de vida adecuados para toda la población. La distorsión en la asignación interna de los

recursos y la consolidación de una mentalidad rentista son algunas de las causas de esta aparente paradoja, que afecta particularmente a los países latinoamericanos productores de petróleo (Schuldt y Acosta, 2006).

El distanciamiento de las políticas de Ecopetrol con las necesidades del municipio y del país en general, es decir la evidente contradicción entre los intereses de Estado y los de las clases populares, va perfilando en Barrancabermeja un enfrentamiento directo con el Estado que traerá como consecuencia una constante militarización de Ecopetrol, pues su control estaba en disputa. Este tipo de presencia estatal (fuerte y precaria), estas “mediaciones selectivas del Estado”¹ implicaron a la vez, que todos los procesos de militarización de los que ha sido sujeto Ecopetrol, como los tratamientos dados a las huelgas petroleras (que empiezan muy temprano, en 1924, casi cuatro años después de la implantación de la TROCO), determinan el alto grado de represión del que ha sido objeto la ciudad en general.

Estos procesos políticos y sociales van a determinar la conformación espacial y territorial de la ciudad. En Barrancabermeja, la vía férrea cruza de sur a norte el área urbana, dividiendo la ciudad en dos. Hacia el occidente está el río Magdalena, el puerto, la refinería, el comercio y los barrios centrales. Hacia el oriente, “del puente para allá”, están los barrios populares, “las comunas”, donde habitan los pobres (desempleados, trabajadores informales y empleadas domésticas) y donde van a surgir las milicias de la guerrilla. Estas zonas marginales fueron construidas a punta de “invasiones”, en las cuales campesinos desplazados, migrantes y demás desahuciados levantaron barrios enteros en las décadas de 1960, 1970 y 1980, con el apoyo de militantes comunistas, anapistas, liberales y religiosos.

Así nacen numerosos barrios de invasión que dan un lugar de vivienda a desplazados y perseguidos, sumándose a la tradición de resistencia existente en el puerto petrolero. De esta forma los nombres de ciertos barrios aluden a la resistencia indígena, al proceso independentista y a líderes populares de gran reconocimiento: Yarigués (indígenas que se resistieron a la ocupación española), Pipatón (cacique de los yarigués), Yarima (esposa de Pipatón y líder femenina de los yarigués), La Tora

1 Este concepto hace referencia que, si bien no se puede hablar en estricto sentido de un abandono estatal, si se evidencia que hay presencia solo en algunas dimensiones, como la tributaria y la militar, pero en otras hay ausencia estatal. Ver: Colom González y Mas Torres, 1988, 227 ss.

(bastión de los yarigués), La Independencia, La Libertad, La Esperanza, La Victoria, Simón Bolívar, Antonio Nariño, José Antonio Galán (líder comunero), Rafael Uribe Uribe (dirigente del liberalismo radical), Jorge Eliécer Gaitán, entre otros.

Relación movimiento cívico-USO

El llamado movimiento cívico en Colombia nace de la protesta convocada por las fracciones civilistas de la burguesía, que asumió la forma de movimiento ciudadano de masas, el cual constituyó un elemento central para el derrocamiento de la dictadura militar de 1957. Lejos de desaparecer, el movimiento cívico ha continuado desde entonces como instrumento de lucha para la consecución del más diverso tipo de reivindicaciones populares, y cada vez más se fue “depurando” de los partidos tradicionales, que en varias oportunidades trataron de coptarlo.

La magnitud del fenómeno de la paralización cívica es el hecho de mayor envergadura en el movimiento social de los sectores populares junto con el desarrollo del movimiento huelguístico de los trabajadores en la década de 1970.

En Barrancabermeja estos movimientos cívicos han querido ser asimilados, por un lado, por sectores oficialistas como el FILA (Frente de Izquierda Liberal Auténtico) que, con un pretendido progresismo, han querido reemplazar el movimiento, para simplemente volverlo funcional al clientelismo del país. Otros agentes que han querido también coptar el movimiento son los grupos económicos, reflejado en los “comités privados de desarrollo”, los cuales congregan diversos sectores dependientes de la propia estructura productiva del centro urbano y quienes se encuentran allí inscritos, sin ser nada representativos, porcentualmente hablando, de la población.

Sin embargo, a medida que se va radicalizando el movimiento y desborda los anteriores aparatos, la misma dinámica conduce a los sectores populares a involucrarse e interesarse en el desarrollo de las actividades. En el movimiento cívico las capas ligadas a los trabajadores, pequeños comerciantes, campesinos y jornaleros, etc., tienen que construir su propia fuerza, única garantía de que sus reivindicaciones sean mantenidas o negociadas por el movimiento. Se trata –para los sectores populares– de encontrar la manera de construir en los procesos mismos su fuerza y su propia capacidad de negociación.

Lo anterior sirve de contexto para indicar que en Barrancabermeja no es posible hablar de un movimiento policlasista o pluriclasista, que encabezara los movimientos cívicos, pues no se desarrolló una oligarquía que se declara a distancia de las “mayorías populares”. Si bien dentro

de los movimientos se encontraban pequeños tenderos y campesinos (y eran ellos dueños de los medios de producción), ni ellos se pretenden como clase privilegiada, ni efectivamente estaban insertos de una manera exitosa a las cadenas productivas y comerciales de los mercados. Por otra parte, si en algún momento ciertos comerciantes y políticos tradicionales participaban del movimiento, prontamente y por la dinámica y radicalización del mismo se aislaban.

Los paros cívicos en Barrancabermeja han sido la mejor expresión de democracia y de participación popular ejercidos de manera exitosa. Las asambleas populares y las decisiones colectivas no son allí parte de un ideal, del que jamás se esperan concreciones, sino prácticas que hacen parte de la memoria colectiva. Las decisiones y la participación han permitido que los pobladores se asuman como sujetos históricos en la construcción de su historia y de la de su pueblo. En el presente trabajo se escogió precisamente el periodo 1970-1985, porque fueron estos los años en que el movimiento cívico, que propendía en general por el mejoramiento de la calidad de vida de la población, tuvo mayor movilización en Barrancabermeja, y de la mano de la USO logró varias victorias, pero sobre todo experimentó momentos de poder popular que se multiplicó en cada poblador, porque es fruto de la memoria colectiva del puerto petrolero.

A partir de pequeñas conquistas, de lo simple a lo complejo, los pobladores van descubriendo su capacidad de dar solución a sus problemas. Esto los lleva a pensar en la necesidad y posibilidad de organizarse para impulsar un proceso de lucha hacia la generación de poder popular. Allí prima lo colectivo sobre lo individual, la satisfacción de necesidades más que el lucro y la repartición social y equitativa de los excedentes más que la apropiación individual.

Es importante resaltar que estos procesos y estas demandas evidencian la exclusión de los sectores populares, sin que signifique esto que hubieran pretendido ser una forma de integración funcional a la dinámica política, sino una intervención de las fuerzas sociales en el desarrollo de la vida colectiva. La idea es incidir de algún modo en el resultado final de la planeación y la configuración de la ciudad (y del país). Esta participación popular se caracterizó por una construcción y participación desde las bases, por la lucha por la democracia y la vida digna, con una gran demanda de autonomía y alto nivel de organización popular.

Por lo general, los grupos base están conformados por vecinos y conocidos: cada persona es interlocutor válido y tiene importancia para el grupo, lo cual facilita el desarrollo de mecanismos de participación en las deliberaciones, en la toma de decisiones, en la ejecución y la asignación

de responsabilidades. Es decir, hay un alto grado de control social comunitario, desde la ética y la responsabilidad. Esta práctica democrática participativa permite un alto grado de autovaloración, pues es un importante estímulo poder ser sujeto histórico desde la movilización, en un mundo que niega la posibilidad a los sectores populares.

Las relaciones de la USO con la comunidad se dan de manera directa e inmediata, con la lucha por derechos específicos o reivindicaciones concretas; o de manera indirecta, con el beneficio para otros sectores urbanos, que son favorecidos de una u otra forma por la convención colectiva entre la USO y Ecopetrol. En las décadas de 1960 y 1970, la USO se constituye en el núcleo de las reivindicaciones civiles de Barrancabermeja, con un momento cumbre en las luchas cívicas de finales de la década de 1970 y con el Paro Cívico Nacional de 1977. En este periodo, la USO se consolida como dinamizadora de la movilización social regional.

Este auge de los movimientos cívicos en la década de 1970 se vio reflejada en importantes paros y huelgas que se fusionaron para pedir por mejores condiciones de salubridad en la ciudad, incluso del paro cívico de 1977 se logró la construcción del Instituto Universitario de la Paz, centro de estudios superiores de carácter público más importante de la región. Sin embargo este movimiento estuvo acompañado de una gran represión y señalamientos por parte de la institución.

La década de 1980

¿Por qué no se presentan huelgas en esta década? ¿Por qué no son tan contundentes los paros cívicos? Dados los fuertes elementos de represión vividos por el movimiento cívico popular en la década de 1970, en el interior del sindicato se presenta una reestructuración. Luego de tantos detenidos, despedidos, amenazados, asesinados, el sindicato queda debilitado y sabe a qué debe atenerse con acciones abiertas de masas y decide no realizar más huelgas, sino pequeños paros, mítines informativos y sabotajes en la producción, el que finalmente es su espacio natural. Además, la alcaldía emplea cada vez con más frecuencia la moda de reaccionar rápidamente a las demandas, pero con acciones de corto plazo, lo que más tarde desembocaba en una nueva razón para hacer un paro. Esta estrategia de desmovilizar a la gente, con supuestas respuestas inmediatas a las demandas, se presenció en el periodo 1980-1985.

La historia de la USO se haya inscrita en el contexto anterior, en una Barrancabermeja que transpiraba petróleo y paría petroleros, y de un pueblo que se movilizaba al lado de sus héroes de overol, que le enseñaron cómo se hacía patria.

La USO asume como banderas la lucha de clase y la lucha nacionalista, trasciende lo gremial y plantea propuestas. La unidad y la cohesión como grupo social son el resultado de una conciencia social en el que intervienen el sentido de pertenencia y la identidad que tienen los trabajadores con su organización.

La identidad es el elemento que mejor articula la cultura obrera con la cultura popular, crisol que se encuentra en el puerto petrolero:

La construcción de la identidad es algo que hace la clase misma pero ubicada en determinadas condiciones materiales, y por presión de imágenes externas fruto del mismo conflicto social. La identidad tiene que ver con tradiciones heredadas y nuevos hábitos generados por los contextos de explotación y opresión. Es algo que se alimenta de las culturas populares regionales, pero con las particularidades que los trabajadores asalariados aportan (Archila, 1991, 30).

La “identidad obrera” se construye gracias a la relación del grupo social con el quehacer cotidiano y se apoya en la cultura local en la cual se encuentra construyendo su proyecto de vida y mejorando sus condiciones de existencia. La identidad de los trabajadores liga las actividades propias de la labor sindical con la historia de Barrancabermeja: resistencia a la presencia de multinacionales, al sectarismo político y un marcado sentimiento nacionalista.

Relación neoliberalismo-paramilitarismo en Barrancabermeja

En la década de 1970 se hicieron cada vez más frecuentes las medidas extraordinarias: el Estado de sitio se decretó en todos los años sin excepción². Mediante esta táctica de terror se buscó desarticular el movimiento popular, desmoralizar las formas organizativas de participación que conllevan algún reclamo, eliminar a la oposición política, para que finalmente el mismo régimen proponga una solución a la crisis y a la violencia mediante mecanismos extraordinarios. La figura del Estado de sitio es un mecanismo de gobierno, a todas luces arbitrario, el cual se ha traducido en una política continuada de represión a todos los niveles contra el derecho elemental que tiene el pueblo de expresarse, movilizarse y organizarse en la defensa de sus intereses. Tal situación de hecho ha dado lugar a un desplazamiento progresivo de la justicia ordinaria a la militar. Estos procesos se aplican en forma indiscriminada en el país a toda clase de situaciones, que abarcan desde las puramente delictivas hasta las que constituyen expresiones políticas de la inconformidad popular.

2 Ver Gallón, 1979.

El Estado de sitio cumple dos funciones básicas: sirve para expedir leyes, decretos, ordenanzas de los grupos oligárquicos para eternizar su dominio y sirve para reprimir las exigencias de obreros y campesinos. Además es ejecutado por el Ejército, pues indudablemente reprimir al movimiento sindical con el fin de acabarlo, es dejarle el camino libre a las multinacionales para apoderarse de nuestros recursos, en este caso los energéticos. Bajo el Estado de sitio, el Ejército recibe prebendas de toda índole (reajuste automático de sueldos, elevados presupuestos de guerra, computación de tiempo de servicio doble, etc.). Esto hace que también el Ejército esté interesado en generar violencia, que justifique la eternización del estado de sitio. Además, día a día pasan a sus manos importantes campos de la actividad estatal como la justicia, que a través de los consejos verbales de guerra es ejercida casi en su totalidad por el aparato castrense.

En todo el país se vivió persecución al movimiento popular y se evidencio la separación que había entre los intereses privados del Ejército nacional (que respondían a las multinacionales y a los gamonales regionales) y a los intereses públicos de las mayorías populares en el país. Este hecho se tradujo en la década de 1980 en la cada vez mayor presencia de estos ejércitos privados.

De ahí resultan –a pesar de que no prosperaron los proyectos gubernamentales de constitución patéticamente regresivos– las conmociones interiores, los treinta y cinco años de la legislación de Estado de sitio convertida en legislación permanente, las zonas de orden público, las jefaturas militares, las funciones judiciales para la fuerza pública, el control de alimentos y de movilización de persona y la limitación de huelgas.

Ya para la década de 1980, se presenta un cambio de estrategia. El recurso de la “guerra sucia” marca una diferencia grande respecto al simple régimen de democracia autoritaria y restringida del Frente Nacional. Ahora no es solamente la opción por el orden frente a la libertad y la garantía privilegiada de la libertad económica en perjuicio de las libertades y garantías individuales y de los derechos económicos, sociales, culturales y políticos. Ahora y a partir de la década de 1980, se apela a la violencia oficial, aprovechando la coyuntura de la violencia generalizada dentro de la cual se la esconde. Por ello invariablemente se invoca al narcotráfico, al terrorismo y a las “fuerzas oscuras” cada vez que se reclama explicación al gobierno sobre el tema de la guerra sucia.

Se trata de buscar una relegitimación formal del Estado, preferentemente acompañada de una recomposición autoritaria dentro de un “nuevo orden”: primero el orden que la libertad, primero la libertad económica que la individual, primero la apertura económica que la realización de los derechos sociales.

Específicamente, en la región del Magdalena Medio, la guerra sucia se expresó tanto en el campo como en la ciudad de una manera contundente por el afán de la lucha contrainsurgente. Se encuentran en el escenario una doble agresión, por una parte los operativos militares, en los cuales la región es objeto de un continuo patrullaje. Y por otra, las acciones contundentes de los paramilitares que se empiezan a consolidar en esta zona³.

Periódicamente se organizan operativos militares que comprenden una subregión o área determinada donde actúan unidades militares y grupos de contrainsurgencia, con el apoyo de otras armas. Durante la realización de estos operativos la población es objeto de detenciones masivas, asedio continuo, aplicación del extrañamiento o destierro, etc.

Junto a estos operativos se evidencia la acción de los paramilitares. Para los campesinos de la región, la presencia de civiles armados ejecutores de los designios de los mandos militares y de los terratenientes no es novedosa. Sin embargo, es constatable el creciente auge de grupos de civiles organizados que patrullan la zona con uniformes y les acompañan en allanamientos, detenciones, etc. Antes se trataba de grupos de contrainsurgencia, unidades especializadas en la lucha contraguerrillera. Ahora son grupos paramilitares conformados por campesinos de la región.

Estos grupos, que actúan bajo diferentes denominaciones (tal vez es la zona del país donde actúan bajo las más diversas siglas y nombres) como el MAS, los Tiznados, Los Grillos, La Mano Negra, el Comando José Raquel Mercado, son los mismos encargados de proferir amenazas de muerte contra miembros de corporaciones públicas, organizaciones populares, militantes de partidos políticos, periodistas, abogados, miembros de comités de derechos humanos, dirigentes cívicos, campesinos, sindicalistas y sacerdotes de las parroquias ubicadas en la región, incluyendo el cura Eduardo Díaz, quien es reconocido en Barrancabermeja por el apoyo a la movilización popular, y quien participó activamente en paros y huelgas. Estas personas, a través de volantes, llamadas telefónicas o en forma directa, son amenazadas de muerte por estas organizaciones.

La reunión donde se oficializa su conformación la preside el alcalde militar de la ciudad y están presentes además representantes de la Texas Petroleum Company (TEXACO), miembros de la Federación Nacional de Cafeteros, algunos jefes de directorios políticos, socios del Club de Leones, miembros de la Defensa Civil, algunos ex alcaldes municipales, algunos inspectores de policía, excombatientes de la guerra de

3 Los datos y testimonios aquí referenciados son tomados de Zamora, 1983.

Corea, agentes del DAS, F-2 y B-2, “Pájaros” que han servido a la Texas en conflictos laborales y algunos comerciantes.

En la década de 1980 se escucharon nuevas demandas: “Sí a la vida”, “Por el respeto a los derechos humanos”. Los altos niveles de asesinatos selectivos, la entrada abierta de los *tiras* en el paro de 1985, el hecho de que el primer muerto de la Unión Patriótica (UP), Leonardo Posada, lo hayan asesinado en Barrancabermeja⁴, el atentado contra los tres sindicalistas del que fue testigo la niña Sandra Rondón, hecho por el que después fue asesinada, no son hechos aislados. Y si bien el Estado con estas estrategias de “resolución de conflictos” no logró desarticular el movimiento, sí le atestó un golpe de muerte. El miedo asusta, pero también potencia. Entonces se cambió la consigna, pero no se negoció la dignidad.

Además ante la crítica situación, desde diversas instancias se hacen llamados y una presión constante a las autoridades para que intervenga en Barrancabermeja. La principal medida tomada por el gobierno contra la ofensiva paramilitar fue el envío de fuerzas especiales urbanas a la ciudad (arribando un destacamento de 45 hombres) y el aumento del pie de fuerza. También se da la creación de “Frentes de seguridad local” por parte de la Policía Nacional.

La descripción hecha por *El Tiempo* de la instalación de los paramilitares en Barranca es la siguiente:

De acuerdo con los reportes de los habitantes y las autoridades, en el puerto petrolero las AUC tienen escuadrones en los barrios nororientales y surorientales, conformados por vigilantes de civil que se reconocen por su corte de pelo (casi rapado) camiseta negra, celular, arma y botas. Se movilizan en motos o en grupos de cinco, que a veces portan armas largas para patrullar.

El BCB⁵ es el que opera en la zona y sus comandantes “Harold” y “Setenta” controlan a sus hombres desde el corregimiento El Llanito a dos horas de Barranca. Sus acciones son financiadas por la vacuna anual que pagan los comerciantes, el hurto de gasolina y el dinero de la

4 Leonardo Posada fue asesinado el 30 de agosto de 1986.

5 El Bloque Central Bolívar de las AUC es creado cuando es asesinado, por orden de Castaño, Camilo Morantes, jefe de las AUSAC, quien había dirigido las acciones paramilitares en Barrancabermeja entre 1998 y 1999. En ese momento, las fuerzas paramilitares que existían en el Magdalena Medio son reestructuradas bajo el mando de Iván Duque o Ernesto Báez. Hoy en día, el BCB ha ampliado su presencia en el nororiente del país y se ha expandido a otras regiones como el Putumayo.

coca. Las autoridades sindicaron a los paramilitares de la mayoría de las 567 muertes violentas que se registraron en el 2000 y las 420 que se presentaron el año pasado (2001).

De la etapa de destrucciones y secuestros se pasó a la de ejercer presiones sobre las formas de vida de la comunidad. Así, desde noviembre del año pasado, comenzaron a repartir un manual de convivencia en los barrios nororientales y surorientales. Imponen castigos como el destierro a casos de homosexualidad, drogadicción o infidelidad, y los jóvenes deben seguir horarios de salidas para departir en la calle. Desde hace un mes, las ONG y los medios de comunicación comenzaron a ser cuestionados por sus comandantes (*El Tiempo*, 29 de julio de 2002).

Son varios los acontecimientos que evidencian que en parte, esta *convivencia* entre masacres paramilitares y fuerza pública se explica en parte por el encuentro de intereses y de esfuerzos para lograr objetivos comunes. Se evidencia principalmente la relación entre la armada y estos grupos ilegales.

La inteligencia de la armada en coordinación con MAS, había estado implicada en asesinatos antes de 1991; como el asesinato del sindicalista Manuel Gustavo Chacón, que un miembro de la armada mató a tiros el 15 de enero de 1988. Pero la orden 200-05/91 reavivó la asociación ilegal que databa de 1989. En asociación con MAS, la red de inteligencia de la armada creada en Barrancabermeja, asumió como su objetivo la eliminación no sólo de cualquier sospechoso de apoyar a la guerrilla, sino también de miembros de la oposición política, periodistas, sindicalistas y trabajadores de los derechos humanos, especialmente si estaban investigando o criticando sus tácticas de terror. Los objetivos incluían a miembros y líderes de la USO, del sindicato de choferes de la empresa de transporte San Silvestre, del comité regional para la defensa de los derechos humanos CREDHOS y de la UP. Eran los mismos grupos que aparecían en una lista negra puesta en circulación por el comando "Ariel Otero", un grupo paramilitar en enero de 1992, en la que juraba que vengaría cada acción guerrillera asesinando alguien⁶.

Otro elemento que aportó en el procesos de consolidación de los paramilitares fue la pérdida de hegemonía de las guerrillas. El tema de la economía de guerra utilizado en el último periodo por la guerrilla

6 <http://www.hrw.org/spanish/informes/1996/colombia3.html#barrancabermeja>

también es un hecho susceptible de analizar, el “boleteo” o pago de vacuna empezó a ser una práctica generalizada, que despertó incomodidades hacia las organizaciones guerrilleras, además creó un clima de gente infiltrada o “volteada”, puesto que quien se negaba a pagar era señalada, lo que facilitó la incursión paramilitar. Es decir la pérdida paulatina de la relación guerrilla-organización social, en parte debido a la dinámica misma de la confrontación y a la degradación de la guerra.

Un intento de análisis que condensa los anteriores acápites lo encontramos en las palabras del obispo de Barrancabermeja monseñor Jaime Prieto Amaya:

Nos preguntamos por que Barrancabermeja no tuvo la capacidad de reacción para controlar esta incursión. La respuesta es triple: primero, porque las múltiples atrocidades y los permanentes actos delictivos y violatorio de los derechos humanos y del DIH por parte de la guerrilla contra la población civil llevaron a esta última a deslegitimar su acción y a manifestar su amplio rechazo con la aparente aceptación del nuevo grupo dominante. Segundo porque dicha población civil, contradiciendo de raíz la imagen que se ha presentado en el país y en el exterior es, fundamentalmente pacífica y tolerante, está desarmada y sólo busca un espacio de vida, de convivencia y bienestar. Tercero porque no se descifró oportunamente la táctica de penetración de la AUC que no llegaron a la ciudad produciendo masacres o enfrentamientos armados que alertan a la población y a la fuerza pública. Otra hipótesis se maneja en relación con esta última. Nos parece importante sin embargo, partir de alguna que propicia la búsqueda sincera de las causas y a confirmar o eliminar las sospechas de nexos entre fuerza pública y las AUC (Diócesis de Barrancabermeja, 2001).

Por otra parte y sin ser casualidad, el modelo neoliberal se impone en Colombia para este mismo momento histórico. Si bien encontramos asomos de estas políticas desde el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986), es en el periodo de Cesar Gaviria (1990- 1994) y, gracias a la nueva constitución, que se institucionaliza tal modelo.

El modelo neoliberal se caracteriza por procesos de carácter integral que involucran la totalidad de la vida económica, social y política. El proyecto económico del neoliberalismo ha supuesto la construcción de un nuevo orden: el neoliberal, en el cual la esfera del Estado ha de ser limitada.

Su función principal ha de ser la de proteger la libertad contra los enemigos de puertas para afuera y puertas adentro, preservar la legalidad

y el orden, hacer cumplir los contratos privados, fomentar los mercados competitivos (Estado mínimo).

El poder del Estado debe estar disperso, si el Estado ha de ejercer el poder, es mejor que lo haga en la división subprovincial y no en la provincia, mejor que lo haga en la provincia y no en la capital central (Friedman, 1966, cap. 2).

La implantación del modelo neoliberal requiere reformas políticas y económicas, entre ellas: apertura completa de las economías a los mercados y al capital internacional, recorte del gasto público y eliminación de los subsidios sociales, privatización de las empresas estatales y, en general, el establecimiento del clima más propicio para la inversión extranjera.

Si el análisis de este modelo lo realizamos desde las teorías de la modernización y el desarrollo, las cuales afirman que la entidad nacional es la unidad de análisis por excelencia del fenómeno modernizante, concebida como un actor independiente que desarrolla procesos de toma de decisiones de manera autónoma y donde el desarrollo es concebido como un camino lineal, con etapas sucesivas de lo tradicional a lo moderno, entonces tendríamos que la industrialización y el crecimiento económico llevarían al desarrollo; por tanto el problema del subdesarrollo es de tradición y cultura.

Pero se oponen a éstas visiones (y se privilegian en el análisis) las teorías marxistas, las cuales destacan las limitaciones y distorsiones impuestas históricamente al desarrollo de naciones atrasadas por parte de los países industriales. Una de las líneas pone énfasis en el impacto del desarrollo histórico del sistema capitalista mundial en el subdesarrollo de los países del tercer mundo y el otro destaca la lucha de clases a nivel nacional en el contexto de la dependencia.

Un componente esencial desde esta teoría del desarrollo es que el concepto desarrollo no es equiparable a crecimiento económico, además este desarrollo debe servir al interés nacional “es la solución de las necesidades básicas de la población y el mejoramiento de su nivel de vida” (Ahumada, 1996, 289).

Para aumentar y acelerar la acumulación de capital se vienen adoptando estrategias que descalifican el poder de contratación del trabajo y que disminuyen su remuneración real. Los abogados laboristas han dado en llamar a este fenómeno deslaboralización, que retrata estrategias del capital para hacer viables sus métodos de incrementar la explotación del trabajo. Uno de estos expedientes es la flexibilización laboral que le permite al empresario disponer de la fuerza de trabajo de acuerdo al ciclo

económico y estimular su rendimiento con el miedo que genera la amenaza al despido y lo que esto implica en el ánimo del trabajador gracias a los contratos temporales.

La élite neoliberal que ha emprendido la transformación económica de Latinoamérica está conformada tanto por una nueva generación de gobernantes que ascendió al poder en el último decenio, como por los tecnócratas que los rodean. Esta élite tiene estrechos vínculos con el capital y las instituciones financieras internacionales, por lo que está comprometida de lleno con el cumplimiento de los recetarios impuestos por ellas.

La mistificación de los procesos económicos por parte de estos tecnócratas no es más que un reflejo de la manera como los ideólogos neoliberales han glorificado las operaciones del mercado. En el fondo se quiere dar la impresión de que las decisiones económicas son un asunto tan serio y difícil que sólo puede ser atendido por expertos, quienes por lo demás siempre se presentan ajenos a cualquier interés político. Al respecto Consuelo Ahumada afirma:

La habilidad de estos equipos neoliberales para reformar la economía estaba estrechamente ligada a sus extraordinarios poderes institucionales, así como a situaciones políticas específicas que les proporcionaron un gran margen de acción para ejercer dichos poderes (ídem, 145).

Este trabajo se encuentra inserto en un contexto económico desalentador, contrario a las noticias que desde el establecimiento buscan generar ruidos para distraer la atención frente a un problema estructural, como es la acentuación de la dependencia. Prueba de esto es el estudio del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional, que a través de una investigación demuestra cómo nuestro sector productivo, nuestra infraestructura industria, ha desmejorado considerablemente en los últimos 15 años.

El sector industrial es la gran decepción de los últimos años en materia de generación de nuevos puestos de trabajo y formalización de la contratación. En el último año, fue el segundo sector en crecimiento económico (10,8%) generando solamente el 1,9% en puestos de trabajo adicionales, fiel reflejo de la profundización en la brecha de contratación laboral y el incremento de la productividad. Este sector es el que mejor ha aplicado la ley 50 de 1990, al mismo tiempo que incorporó nuevas inversiones que le permiten sustituir mano de obra, quedándose con los trabajadores más calificados (Moreno y otros, 2007, 91).

Los procesos de reforma económica relacionados con la liberalización y apertura de la economía colombiana han seguido su curso en medio de los altibajos de los escenarios y de los ciclos políticos del país, el discurso oficial, unas veces gira en torno al dialogo y otras a las soluciones de fuerza. Dependiendo en parte de lo drástico que sean tanto la medida adoptada como la respuesta de la población, que a su vez tiene que ver con la relación que esa población tenga con las dinámicas, actores del conflicto y el grado de degradación de la guerra que hayan enfrentado. Estos cambios se han acrecentado en el periodo de tiempo en el que se encuentra inscrito la tesis.

Esto también hace parte de las afirmaciones hechas por los investigadores del CID:

[...] distraída la población por el conflicto armado interno, y su dilatada resolución, los gobiernos han podido llevar a cabo un fuerte activismo económico en el desmonte de las políticas de industrialización desde comienzos de los años noventa (ídem, 229).

A nuestro modo de ver, este proceso se relaciona con uno mayor que se desarrolla a escala mundial y que tiene que ver con las transformaciones contemporáneas del capitalismo, las que describe Atilio Boron así:

Desde el punto de vista político la complicidad entre los estados neoliberales y el capital “globalizado” se ha tornado mas transparente aún, [...] socialmente el capitalismo mercantilizó todos los aspectos de la vida social, desde la fuerza de trabajo, por supuesto, hasta la salud mental y el medio ambiente, desde las creencias religiosas, hasta la identidad de los sujetos, se presenta también una intensificación de la explotación del trabajo a medida que avanza el desarrollo capitalista (Boron, 2000, 33).

Y si se parte de la idea básica de que el paramilitarismo es un fenómeno social y no solamente militar, podemos entonces entender esta imbricada relación que evidencia al autoritarismo, expresado en este caso en el paramilitarismo como herramienta de implementación de un modelo económico –el neoliberal– que atenta abiertamente contra el interés de las mayorías, y que choca por tanto con ellas, principalmente cuando éstas están organizadas.

Esta concepción del paramilitarismo como algo social es importante para entender su implantación en Barrancabermeja pues, a diferencia de lo que ocurre en el campo, no existe la posibilidad de desplazar a toda la población y se vuelve imperioso implantar su modelo con la población existente o una parte considerable de ella. Por

ello se ven en la obligación de recurrir a una metodología algo distinta, evolucionando según sus necesidades y posibilidades manteniendo fijo su objetivo estratégico de destruir cualquier expresión de oposición a los estamentos de poder (Longsigh, 2002, 7).

En el caso específico de Barrancabermeja esta articulación se da de la mano del paramilitarismo y el Estado, el cual por una parte apoya acciones militares de grupos ilegales y por otra implementa una política de privatización tendiente a favorecer a la multinacional OXY.

Conclusiones

Nuevas demandas y viejas necesidades

Los pobladores de Barrancabermeja, incluidos los sindicalistas, identifican la entrada de la guerra sucia con el gobierno de Turbay Ayala (1978-1982), y saben claramente que esto obliga a cambiar de táctica tanto a las organizaciones sociales en general como al sindicato en particular. Además, en esta época se elevan las tasas de desplazamiento en Barrancabermeja por el creciente proceso de paramilitarización de la región, y arriba a la ciudad un gran número de gente que no tiene ninguna relación con Ecopetrol, lo cual desborda las dinámicas propias de la USO. Estos nuevos pobladores se identifican más con otro tipo de demandas, pues no han construido sus dinámicas de vida en torno a la relación con la USO, ni con las actividades relacionadas con el petróleo.

Como resultado obvio, se redujo en número los paros cívicos y las grandes movilizaciones populares así como la participación de organizaciones como la USO en las mismas. Las condiciones de insalubridad, de calidad de vida de los pobladores mejoraron lentamente, aunque no por voluntad del Estado sino por las movilizaciones que caracterizaron el periodo, pero que fueron trasformándose. El aumento de la represión y de los asesinatos hizo caer en un proceso de reflexión al movimiento, puesto que para disfrutar de este leve mejoramiento de las condiciones de vida era necesario preservarla. Se cambiaron las demandas, las consignas, un rotundo sí a la vida era la nueva proclama, aunque las necesidades se mantuvieran: no sólo la mejora del acueducto, sino la necesidad de participar activamente de las decisiones que afectan a la colectividad, que es la necesidad que el Estado no está dispuesto a satisfacer.

Esta postura se evidencia por ejemplo en el aviso publicitario presentado en el espectador el 15 de diciembre de 1985 “Barrancabermeja por la vida. Y porque siempre haya paz y garantías ciudadanas en el Magdalena Medio”, en donde se hace un llamado al dialogo y a la negociación

por encima de la represión, el respeto de la vida y los derechos humanos integrales, contra el desempleo, y contra las amenazas a los dirigentes populares. Se le exige al Estado el otorgamiento de garantías para el pleno ejercicio de los derechos individuales y colectivos, y es firmado por una variedad de organizaciones y de sectores de Barrancabermeja.

¿Qué ha significado el tránsito?

Lo primero que habría que afirmar es que el movimiento obrero no se ha acabado. Los desempleados y el empleo informal lo han desbordado, y si bien los errores propios de la burocratización del sindicalismo deben ser estudiados para aprender de ellos, no debemos asumir que allí se acaban de señalar las responsabilidades. El Estado por diferentes medios ha sido, sin duda, el principal culpable de las muertes, desapariciones, desplazamientos de los obreros y por ende de los sectores populares, básicamente por la flexibilización laboral y la guerra sucia.

La relación entre la USO y el movimiento cívico-popular, abonada por largo tiempo y sin disputarse el protagonismo de uno u otro, ha dejado huellas profundas en la memoria colectiva de un pueblo. Y pasarán más años y más muertos, y esa relación sobrevivirá gracias a las expresiones diarias de resistencia que alimentan esta herencia.

Es evidente también que ninguna participación es ni puede ser neutral. Por esta razón un proceso de participación que pretenda responder a los intereses de los sectores explotados y oprimidos debe tener como punto de partida el antagonismo de clases que define nuestra sociedad, tomando explícita o implícitamente partido dentro de él, conscientes de la lucha cultural e ideológica por consolidar poder y dirigir al conjunto de la sociedad de acuerdo a sus intereses de clase. En Barrancabermeja se ha desarrollado este mecanismo por medio de la creación de aparatos propios: prensa popular, talleres, grupos artísticos y folclóricos, entre otros.

La tesis de que el escenario de las luchas pasa del ámbito de la producción a la del consumo colectivo, con la que algunos estudiosos del movimiento social han querido restar importancia al movimiento obrero, es necesario estudiarla con detenimiento. No se puede concebir ninguna sociedad sin producción, así pues el consumo está subordinado a la producción, se relacionan en una estrecha cadena de mercado, que empieza en la producción y termina en el consumo, todos somos parte de esta cadena y es necesario entonces mirar quien recibe las ganancias tanto en el proceso productivo como en el de consumo, para encontrarnos de nuevo como sectores populares y volver a desarrollar luchas conjuntas.

Es importante reconocer que en el caso de Barrancabermeja

lo que afianza su capacidad de organización y lucha son los procesos de participación popular que se logran partiendo de las necesidades sentidas e inmediatas hacia procesos de mayor contenido político generando en su práctica un alto grado de conciencia en los sectores populares. Así pues es necesario reconocer como los obreros, por medio de la producción en Ecopetrol, que según revistas como *Semana* o *Cambio* que dan cuenta de las empresas más rentables del país, son la principal herramienta para el desarrollo de las regiones. Así la lucha por la asignación efectiva de recursos para los pobladores que habitan en los principales lugares donde se explora y refina el petróleo y por contratos de asociación que realmente evidencien una soberanía estatal, es el argumento central para una lucha conjunta donde el movimiento obrero siga ocupando un lugar significativo en el movimiento cívico- popular, para no aceptar la premisas de expertos económicos desde los años de la apertura de que a la economía le va bien, pero al país le va mal.

Otra tesis que resulta discutible es la afirmación acerca de la autonomía de los trabajadores en la producción flexible, lo cual significaría la desaparición de las condiciones de explotación y de las razones del sindicalismo, pues es precisamente en esos procesos que se observa un incremento de la explotación y de la extracción de plusvalía, al tiempo que se rompe con la solidaridad de clase típica de la gran industria.

En la medida en que los trabajadores sean desorganizados y derrotados, el capitalismo les impone las peores condiciones con el fin de obtener más ganancias. Con la desaparición de la Unión Soviética y los países de regímenes socialistas, así como por las derrotas históricas de la clase obrera en Europa occidental y el aplastamiento a sangre y fuego de los procesos revolucionarios en el sur del mundo (Nicaragua, Salvador, Angola, Mozambique, etc.) se generó una reorganización brutal del trabajo a escala planetaria. Esa reorganización no sólo ha sido material sino, lo que resulta siendo peor, política y cultural, puesto que ha generado cambios significativos en el plano de la organización y de la disposición de lucha de los trabajadores. Dicha reorganización ha asumido diversas formas de criminalidad laboral que, en muchos lugares, son idénticos a los procesos de explotación de la primera revolución industrial en Inglaterra, donde en las fábricas vivían y trabajaban hombres, mujeres y niños que laboraban en jornadas de 15 o más horas, sin contar con la más mínima protección social y sometidos al régimen brutal de los capitalistas y del Estado (Vega, 2005).

Como los estados han aceptado este programa bajo el lema de alcanzar la competitividad, en la práctica no se requiere del derecho laboral, puesto que ya no hay nada para regular debido a que se han

eliminado o están en proceso de serlo los contratos, la jornada fija de trabajo, las vacaciones y descanso remunerado, el régimen de pensiones, los sindicatos y la lucha legal de los trabajadores. Estamos asistiendo, entonces, a la consolidación de un “capitalismo sin ciudadanía” (Win, 1998, 105 ss), en el que regulación se deja de manera exclusiva al mercado, se recorta la democracia y se limitan los canales de movilización y de protesta social que posibilitaban la defensa de los intereses de los pobres y de los trabajadores, privilegiando la represión y el control policivo, aunque los gobiernos sostengan que fueron escogidos “democráticamente” por la vía electoral⁷.

No es coincidencia que los periodos de mayor organización sean los de mayor represión. Las amenazas, asesinatos y desplazamientos, así como la pretensión de desarticular la USO con el movimiento popular, ha permitido nuevas contrataciones que evidencian el deterioro de las condiciones laborales al interior de Ecopetrol. Los pobladores de Barrancabermeja, cada vez tiene menos oportunidades de ingresar a trabajar en la refinería y si lo hacen tiene que renunciar en primera instancia a un contrato indefinido, que era una de las principales características de los trabajadores que se vinculaban con la Empresa. Y ni que decir de los logros de las convenciones colectivas, con el argumento de que los trabajadores de Ecopetrol, sobre todo los afiliados de la USO, eran jefes de overol, que ganan salarios ostentosos y están desangrando al país, la gran prensa y del gobierno, han cercenado mínimas condiciones de bienestar, que habían sido logradas por medio de la lucha aun a costa de despidos y encarcelamientos, en un empleo donde se pone en riesgo la salud del trabajador constantemente, donde la calidad de vida del obrero es deteriorada día a día, por las grandes presiones a las que se ve enfrentado, por los cambios de temperatura, por el material que manipula.

En un país donde los derechos humanos (trabajo, salud, educación) no se respetan suelen ser considerados como un lujo o un privilegio. Entonces se ha desmantelado este sistema de seguridad social, del que se beneficiaban no solo los trabajadores sino su familia y los pobladores en general, ya que la generación de empleo era evidente por estos servicios.

Como principales consecuencias negativas en este proceso progresivo de liquidación y privatización de Ecopetrol podemos señalar las siguientes:

7 Vilas, Carlos, “Seis ideas falsas sobre la globalización. Argumentos desde América Latina para refutar una ideología”, en: Saxe-Fernández, John, (Compilador). *La globalización: crítica de un paradigma*. México, Plaza y Janes, 1999, pág. 88-89.

· Consecuencias en términos de la afectación de la vida cotidiana, evidenciada en el cambio de los valores sociales como la solidaridad y la tolerancia política que priman en las relaciones de los ciudadanos del puerto y, en general de las formas de relación que se establecen entre las personas. Dado que esta transmisión cultural tenían una fuerza avasalladora, de esa forma tenía que ser la contrapropuesta ofrecida desde la institucionalidad. La contraofensiva cultural estaba destinada a romper esos lazos que habían logrados trascender a los pobladores y permear a los recién llegados. Las dinámicas aparentemente laborales y disfrazadas bajo políticas específicas de una empresa (en este caso Ecopetrol) relacionadas con la eficiencia y la eficacia van rompiendo valores y dinámicas culturales de la población. Como lo afirma Thompson cuando hace referencia a que toda lucha de clases es a la vez una lucha en torno a los valores⁸.

· La forma como se consolida el clientelismo sobre todo como forma de control social y económico, porque si bien en Barrancabermeja encontramos un clientelismo político tradicionalmente evidenciado por el FILA, se encuentran ahora una dependencia económica que genera nuevas formas de clientelismo muy marcadas y de control social por parte de un grupo armado, en aparente complicidad con el establecimiento. La relación clientelar se consolida como una forma de control sobre la población mediada básicamente por intereses de índole individual y no permite desplegar procesos colectivos, donde las personas desarrollen autonomía en su proyecto de vida. Una de las principales características de la guerra es que desarrolla una estructura que permite el funcionamiento de estas dinámicas clientelares, un eslabón muy importante de esta cadena es la economía ilegal, que en Barrancabermeja se manifestó en el cartel de la gasolina.

· Las transformaciones en materia económica que la ciudad ha experimentado el principal de ellos tiene que ver con un cambio en la vocación productiva de la ciudad a una lógica de prestación de servicios. Esto se relaciona directamente con los anteriores capítulos dado que la prestación de servicios impone una dinámica de servilismo que marca las dinámicas vitales de las personas. Si uno se encuentra en el eslabón de la producción puede controlar de formas más directa y autónoma los procesos económicos, la cadena económica de la ciudad, y en el caso específica del sector petrolero, la dinámica económica del país y es consciente de la importancia de sus papel en ella, por el contrario si la dinámica económica de una ciudad y su pobladores se trasladan al plano de los servicios se impone la condición de servir a los foráneos que lleguen (en este caso a trabajar en Ecopetrol incluso de nuevo personal extranjero) a la ciudad.

8 Ver Thompson, 1981.

Para enfrentar esta arremetida contra las organizaciones populares en general y las sindicales en particular, es necesario entonces volver a coordinar las acciones y a replantear las movilizaciones. El trabajo de base con una gran participación popular han sido sin duda su mejor herramienta, y la prueba de la estrecha relación de la USO con el movimiento cívico popular, a pesar de la represión y los golpes que han recibido, fue la anterior huelga de 2004, que contó con un masivo apoyo popular, cuando se vio la amenaza de privatizar a Ecopetrol, su empresa, que es la única garantía de la existencia de Barrancabermeja como puerto petrolero.

Encontramos entonces varios elementos en la dinámica del conflicto armado en Barrancabermeja que nos ayudan a esclarecer esta compleja relación entre petróleo (y la privatización de Ecopetrol) y paramilitarismo. Si bien, el desgaste de las organizaciones guerrilleras era creciente y fue utilizado como argumento del establecimiento para implementar su modelo autoritario, este hecho no generó en sí mismo un apoyo o demanda de los grupos paramilitares por parte de la población (como si se dio en otras regiones del país). Este proceso (el de paramilitarización) se inserta en la ciudad como una estrategia estatal (con ayuda de las Fuerzas Armadas) tendiente a desestructurar la organización social popular.

Bibliografía

- Ahumada Consuelo. *El modelo neoliberal. Su impacto en la sociedad colombiana*, Bogotá, El Áncora, 1996.
- Archila, Mauricio. *Cultura e identidad obrera*. Bogotá, CINEP, 1991.
- Becerra, Silvia y Camilo Rueda. “El petróleo y la lucha popular en Colombia”, en *Revista Viento del Sur*, n° 1, Bogotá, abril de 2004.
- Borón, Atilio. *Tras el búho de Minerva: mercado contra democracia en el capitalismo de fin de siglo*. México-Buenos Aires. Fondo de Cultura Económica-CLACSO, 2000.
- Chaparro, Jairo. “Recuerdos de un tropelero”, en *Documentos ocasionales*, n° 63, CINEP, Bogotá, 1991.
- Colom Gonzáles, Francisco y Salvador Mas Torres. “Críticas y alternativas a la democracia representativa: en torno al pensamiento político de Claus Offe”, en *Teorías de la democracia*, Barcelona, Antrhopos, 1988.
- Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS) y Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. *Redes de inteligencia y exterminio en Barrancabermeja*. Bogotá, 1999.
- Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS). “El fenómeno paramilitar sobre Barrancabermeja”, en *Credhos*, marzo de 2000.

- Diócesis de Barrancabermeja. *La luz de esperanza*, Barrancabermeja, julio 25 de 2001.
- Friedman, Milton. *Capitalismo y libertad*, Madrid, Rial, 1966.
- Gallón, Gustavo. *Quince años de Estado de sitio en Colombia (1958-1978)*, Bogotá, América Latina, 1979.
- Longsigh, Gearóid. *La estrategia integral del paramilitarismo en el Magdalena Medio de Colombia*, Bogotá, 2002.
- Moreno Álvaro y otros. *Bien-estar y macroeconomía, más allá de la retórica*. Bogotá, CID-Universidad Nacional, 2007.
- Santana, Pedro. *Desarrollo regional y paros cívicos en Colombia, Controversia*, n° 107-108, CINEP, Bogotá, 1983.
- Jürgen Schuldt y Alberto Acosta. *Ecuador*, agosto del 2006. en: www.lainsignia.org
- Thompson, Edwuar. *La miseria de la teoría*. Barcelona, Crítica, 1981
- Vega, Renán. *Un mundo incierto, un mundo que aprender y enseñar*, Bogotá, 2005 (sin editar).
- Vilas, Carlos. “Seis ideas falsas sobre la globalización. Argumentos desde América Latina para refutar una ideología”, en John Saxe-Fernández (comp.), *La globalización: crítica de un paradigma*. México, Plaza y Janes, 1999.
- Win, Dierckxsens. *Los límites de un capitalismo sin ciudadanía. Por una mundialización sin neoliberalismo*, San José, DEI, 1998.
- www.hrw.org/spanish/informes/1996/colombia3.html#barrancabermeja
- Zamora, Gloria Lucy. *Los moradores de la represión*, Bogotá, CINEP, 1983.